



La ampliación de la UE vista desde el Este. Expectativas, experiencias, decepciones y euroentusiasmo

Carmen González Enríquez (Profesora Titular de Ciencia Política. UNED)

WP15-2002 - 27.11.2002

Desde la crisis de 1989, la incorporación a la UE se ha convertido en el primer objetivo de la política exterior de todos los países de Europa del Este, objetivo que ha condicionado a partir de ese año no sólo sus relaciones internacionales sino su vida política interna y su transformación económica. Los motivos detrás de esta decisión unánime en el área son varios, pero sobre todos ellos domina el económico. Desde mediados de los años ochenta, la crisis de la Unión Soviética, que constituía el mercado al que se dirigía entre el 60 y el 80% de las exportaciones de cada uno de estos países, se tradujo en la incapacidad de ésta para absorber y pagar, ni siquiera en forma de trueque, las mercancías que llegaban de la zona. Entre 1989 y 1991 el mercado de Europa del Este con la URSS se redujo en más de un 60% y esta caída del mercado exterior provocó una avalancha de crisis industriales, con miles de empresas reduciendo su actividad a cero y con importantes descensos del PNB en todos los países. Así, por ejemplo, en 1991 el descenso del PNB fue del 14% en Checoslovaquia y en Rumanía, del 20% en Bulgaria, del 9% en Polonia y del 8% en Hungría.

Este declive obligaba a la zona a buscar inmediatamente nuevos mercados y Europa Occidental se presentaba como el único mercado cercano y capaz de absorber los productos del Este, aunque esta sustitución de destinatarios presentaba dificultades importantes por la baja calidad de muchos de los productos manufacturados en el área, aceptables para los estándares de consumo soviéticos, pero no para los occidentales. Esto no regía para las materias primas, los productos agrícolas o aquellos intensivos en mano de obra que Occidente estaba ya importando del Tercer Mundo, como los textiles. Pero junto a esa necesidad de encontrar mercados alternativos, Europa del Este necesitaba una fuerte ayuda económica para reestructurar su industria, que en su mayoría era técnicamente obsoleta y había recibido sus últimas inyecciones inversoras en la primera mitad de los años setenta. Necesitaba igualmente asesoría y redes exteriores para reorganizar toda su actividad económica y dirigirla hacia los mercados occidentales y necesitaba inversiones para desarrollar las infraestructuras que, al igual que la industria, habían sido abandonadas y, especialmente en el caso de las telecomunicaciones, eran una rémora que impedía el despegue económico. La zona afrontaba además estos desafíos en una situación de carencia de capital, público y privado.

La Unión Europea aparecía así ante la zona en primer lugar como un gran mercado pero en segundo y muy de cerca, como una fuente de ayudas económicas y, respecto a las empresas de sus países miembros, de inversiones directas. Aunque se ha convertido en un cliché la afirmación de que a principios de los años noventa Europa del Este esperaba de Occidente una especie de reedición del Plan Marshall, del que no pudo aprovecharse en su momento debido al veto soviético, en realidad no existe constancia alguna de que tales expectativas hayan existido. Es mucho más probable que la herencia de cinismo de la etapa comunista se hiciera extensiva desde el principio a las relaciones con Occidente, y que el pragmatismo y el realismo hayan reinado en las negociaciones. En cualquier caso, sí es cierto que tanto la población en general como las elites de Europa del Este desconocían en 1989 el funcionamiento de las instituciones y de la vida política de Europa Occidental, de los que habían vivido alejados durante más de cuarenta años, y ese desconocimiento quizá despertó esperanzas excesivas.

El vuelco hacia Occidente ha sido progresivo en algunos, pocos, casos y repentino en la mayoría. En el primer grupo se encuentran Hungría y Polonia que a finales de los ochenta ya habían iniciado negociaciones con la CE, que había dirigido hacia ellos el programa PHARE (Poland Hungary Assistance for the Restructuring of Economy), luego hecho extensivo a toda la zona, y que firmaron con la CE acuerdos de asociación en 1991 (junto con Checoslovaquia). Ambos países tenían en común una herencia comunista más ligera, con unos partidos dirigentes alejados del dogma moscovita y empeñados en conseguir una legitimidad popular a través del bienestar económico, lo que les había conducido en los años ochenta a experimentar la introducción de mecanismos de mercado en la economía regulada estatalmente, experimento realizado con cierta fortuna en el caso húngaro y que se había paralizado en Polonia a causa de la oposición del sindicato Solidaridad.

Junto a las razones económicas existen motivos políticos y de seguridad que han empujado hacia la Unión Europea a los países de la zona. La "vuelta a Europa" se ha convertido en un *leit motiv* de las elites políticas e intelectuales que, en su práctica totalidad, consideran que la UE tiene la obligación moral e "histórica" de acogerlos en su seno. Aquí se expresa no sólo el convencimiento de que son "tan europeos" como el que más (algo, por otro lado, difícilmente discutible) sino, a la vez, una queja y una demanda de reparación por lo que ocurrió a partir de 1945, cuando los acuerdos de las potencias occidentales con la Unión Soviética dejaron en manos de ésta el control de la zona. Hoy, los europeos del Este ven en aquello un acto de traición y abandono, que les costó cuatro décadas de atraso y alejamiento de su ámbito natural y que debe ser reparado por Occidente. Así, la "vuelta a Europa" es un slogan que resume todo un proyecto de normalización y de asimilación a la vida política, económica, cultural y social europeas.

En cuanto a las razones de seguridad, la más importante es el alejamiento de la influencia rusa. Puede que esto

parezca poco justificado dada la actual situación de debilidad de la Federación Rusa –aunque esa debilidad entraña a su vez peligros-, pero tiene importantes razones históricas, algunas lejanas y otras bien cercanas, especialmente en el caso de los países bálticos. El área en conjunto ha sido siempre un terreno de competencia entre las grandes potencias limítrofes, que se han repartido su territorio durante siglos: el imperio otomano, el ruso, Prusia, el imperio austriaco, después Alemania. Del imperio otomano sólo queda un Estado que no representa una amenaza para ninguno de los países de la zona (sólo los nacionalistas búlgaros temen su influencia a través de la minoría turca), Austria no es una potencia y Alemania ha sido “neutralizada” en el interior de la Unión Europea. Sólo Rusia sigue existiendo como potencia vecina eventualmente amenazadora. Su último acto de violencia en un país del área fue la ocupación militar, en 1991, de Vilnius (Lituania) para impedir su independencia, y 1991 está muy cercano en términos de su efecto sobre las percepciones y las actitudes. Por su parte, la experiencia de cuatro décadas de comunismo, fruto de una imposición exterior, ha dejado un poso de anti-rusismo que durará décadas como memoria directa de personas vivas y se añadirá después a la lista de agravios que los países de la zona han contraído con Rusia. La evolución de la política interna rusa no ayuda tampoco a despejar ese recelo: la evolución del partido comunista ruso hacia una fusión del nacionalismo con el estatismo, el éxito electoral en diciembre de 1993 de Vladimir Zhirinovski, que propugnaba un nuevo expansionismo de Rusia hacia el Sur y el Oeste y, en general, el hecho de que el nacionalismo sea la única seña identificable de los partidos políticos rusos, son todos ellos elementos que contribuyen a mantener vivo el temor a Rusia. Ésta intentó a principios de los años noventa, cuando cada país del área estaba negociando con ella nuevos tratados de amistad y no había completado aún la retirada de sus bases militares, incluir en esos tratados una cláusula que les impediría la entrada en la OTAN. Sólo el gobierno rumano lo aceptó, aunque finalmente el Parlamento rechazó la cláusula.

Las relaciones de la zona con Rusia han mejorado mucho en los últimos años, desde la inicial ruptura total, comercial y política, a principios de los años noventa, con una progresiva reanudación de relaciones sobre nuevas bases, de mayor igualdad. Pero el pragmatismo que se ha impuesto en las relaciones no impide que el recelo siga siendo un componente básico de la actitud hacia Rusia y la entrada en la UE se presenta como una garantía de alejamiento de la influencia rusa. Aparentemente, la entrada en la OTAN, de la que ya son miembros Polonia, Hungría y la República Checa (y que se ampliará próximamente a los tres países bálticos, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía), debería cumplir ese papel y ofrecer una garantía suficiente a la zona. Sin embargo, la semiincorporación de Rusia a la Alianza Atlántica diluye la identidad política de ésta, frente a la que la Unión Europea aparece como un club mucho más exclusivo del que Rusia no podrá formar parte en muchos años y, precisamente por ello, se convierte en una garantía de seguridad a largo plazo, en términos de la creación de alianzas políticas y de afinidad de intereses.

La búsqueda de seguridad como motivación para el acercamiento a la UE es especialmente notoria en el caso de los países bálticos[1]. En ellos, y sobre todo en Estonia y Letonia, con fuertes minorías rusas (del 29 y el 33% respectivamente), la muy reciente experiencia de pertenencia forzada a la URSS provoca una rusofobia aún más intensa que la de los vecinos occidentales[2]. La doctrina exterior rusa establecida a principios de los años noventa respecto al “extranjero cercano” (las repúblicas desgajadas de la URSS) y su voluntad de mantener una influencia decisiva en esos territorios y de velar por la suerte de los rusos que viven en ellos, se perciben como amenaza en los países bálticos. La insistente negativa rusa a la incorporación de los bálticos a la OTAN se ha interpretado allí igualmente como negación de su soberanía. Por último, la cuestión del *oblast* de Kaliningrado, enclave ruso aislado entre Polonia y Lituania, que Rusia ha remilitarizado en los últimos años en respuesta a la incorporación de Polonia a la OTAN y a la próxima entrada de los países bálticos en la organización, es también fuente de inestabilidad para los tres Estados bálticos, pero especialmente para Lituania. La ciudad de Baltiisk en Kaliningrado se ha convertido en la principal base naval militar rusa en el Báltico tras la desintegración de la URSS, con mayor importancia estratégica que San Petersburgo por su vulnerabilidad al estar encajada al fondo del golfo de Finlandia, con una salida al mar abierto controlada por Estonia y Finlandia[3]. Lituania se encuentra por tanto, entre el enclave ruso, fuertemente armado, de Kaliningrado y Bielorrusia, estrecha aliada política y militar de la Federación Rusa.

La experiencia del acercamiento a la UE

Lo que, con todo su realismo, no esperaban de ninguna forma los habitantes de Europa del Este, era encontrarse provocando manifestaciones de agricultores y obreros metalúrgicos franceses protestando contra las importaciones de acero polaco o productos cárnicos húngaros y polacos o textiles de todo el área, ni que esas protestas se convirtieran en actos de vandalismo contra los camiones cargados de carne[4], ni que, a consecuencia de esta resistencia francesa, a la que se sumaron belgas e irlandeses[5] en lo que se refiere a los productos agrícolas, y españoles preocupados por la competencia en el mercado del acero y el carbón[6], la CE levantara un nuevo “telón de acero” construido a base de aranceles, cuotas y tarifas para impedir la penetración comercial de productos “sensibles”, especialmente los agrícolas y el acero. Esta posición causó una frustración notable en Europa del Este, que se veía a la vez privada de su tradicional mercado oriental y con acceso restringido al mercado occidental, todo ello en medio de una gravísima crisis económica y social, y es sin duda uno de los principales motivos del continuo declive del apoyo popular a la integración en la UE. En 1991, la masiva penetración de productos occidentales en los mercados del Este, junto a esta posición restrictiva a las exportaciones del área, provocaron las primeras protestas populares de agricultores en Polonia. En 1993 el superávit comercial de la CE con los países del grupo de Visegrado, más Bulgaria, era ya de 1.300 millones de dólares.

Los acuerdos de asociación firmados en 1991 con Checoslovaquia, Polonia y Hungría –los tres pioneros- incluían un progresivo desmantelamiento de las barreras al libre comercio que se programaba como tal para el año 2001, en un proceso que los asociados consideraban mucho más lento de lo que deseaban y necesitaban. Esa fecha se mantuvo en los acuerdos de asociación firmados con los posteriores candidatos. Las políticas proteccionistas de la PAC, de la

Comunidad Europea del Carbón y del Acero y del Acuerdo Multifibras, todas ellas básicas en la regulación del comercio exterior europeo y, en el caso del textil, de los países desarrollados en general, han sido un freno sustancial a las exportaciones de Europa del Este hacia la UE. En 1993, en la cumbre de Copenhague, a la vez que se acordaban los criterios objetivables que abrían por primera vez las puertas a una futura incorporación de estos países a la CE, ésta se comprometió a suavizar sus barreras comerciales con mayor celeridad de lo previsto en los Acuerdos de Asociación. La percepción del escaso peso real de las importaciones provenientes de los países candidatos, que en 1992 sólo representaban en total el 1,42% de las importaciones de la CE y el 2,07% de las de productos "sensibles", calmó en parte los temores a una "invasión" de productos del Este y contribuyó a esa suavización de las barreras en la cumbre de Copenhague.[7]

En 1991 se creó el BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) destinado a financiar proyectos para la transición a la economía de mercado en la zona, aunque, dada la gravedad del deterioro económico en las repúblicas desgajadas de la URSS, casi inmediatamente pasó a ocuparse de éstas y abandonó el área de Europa Central, comparativamente menos necesitada y también menos peligrosa. No sólo el BERD, sino en general, el grueso de la ayuda financiera internacional, se desplazó hacia los Estados sucesores de la URSS con el agravante, para Europa del Este, de que a menudo estas ayudas estaban condicionadas a la compra de productos occidentales -por ejemplo, ayuda de EEUU a Rusia para la compra de trigo estadounidense-, lo que hacía disminuir aún más el comercio en el interior del antiguo COMECOM[8].

El principal instrumento de ayuda financiera a Europa Central y Oriental por parte de la Unión Europea es el programa PHARE ya mencionado, creado en 1989 y que desde 1997 se centra en las áreas prioritarias señaladas para cada país candidato en el "Accession Partnership" y en los informes de seguimiento anuales que la Comisión realiza para cada candidato. Desde el año 2000, el programa se ocupa esencialmente de mejorar la capacidad de las instituciones administrativas para absorber las ayudas estructurales, especialmente a nivel regional, de ayudar a los Estados a incorporar el *acquis* comunitario y de promover la cohesión económica y social[9]. Los programas SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) e ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) se crearon en junio de 1999[10], como instrumentos de preadhesión, destinado el primero a la mejora del sector agrícola y al desarrollo rural (en conjunto a financiar la transición de la agricultura del Este de Europa) y el segundo a proyectos medioambientales y de transporte. En el año 2000, el presupuesto destinado a PHARE fue de 1.085 millones de euros, el dedicado a SAPARD era de 520 millones y el de ISPA de otros 1.040 millones.

El gasto previsto para el año 2003 de los tres programas es de 1.627 millones de euros, del que la casi totalidad, 1.614 millones, corresponden a países de Europa Oriental. Según los cálculos de la Comisión, si estos países se integraran en enero de 2004, varios de ellos pasarían a ser contribuyentes netos al presupuesto comunitario, notoriamente la República Checa, que perdería 342 millones de euros ese año, pero también Hungría (180 millones) y Eslovenia (174 millones) [11]. Eslovenia y la República Checa, junto con Chipre y Malta, seguirían pagando más de lo que recibirían en los años siguientes. Para evitar esto, la cumbre de Bruselas de octubre de 2002 decidió aprobar un pago "compensatorio". El presupuesto total de ayudas para los 10 países candidatos para el periodo 2004-2006, aprobado en esa cumbre, es de 40.000 millones de euros. El acuerdo prevé que los candidatos no reciban todas las ayudas agrícolas que les corresponderían, hasta 2013, con el argumento de que estas ayudas desincentivarían a los agricultores orientales a realizar las reformas necesarias para la modernización de su sector. Según el acuerdo, los futuros miembros recibirían el primer año el 25% de lo que les habría correspondido, el siguiente año el 30%, y así hasta el 100% en el año 2013, suponiendo que la PAC siga existiendo entonces en los términos actuales. En cuanto a los fondos regionales, el acuerdo de presupuesto les destina 23.000 millones de euros para los tres años[12] (la Comisión había propuesto en enero de 2002 una cantidad de 25.500 millones, pero las presiones de Alemania y los demás contribuyentes netos rebajaron esta cantidad), a partir de un cálculo sobre la capacidad de las administraciones regionales y nacionales de la zona para absorber esas ayudas, que requieren una contrapartida financiera por parte de los que las reciben. Por esta razón, y porque se ha excluido de la primera ronda de ampliación a los dos países más pobres, Rumanía y Bulgaria, España no va a perder dinero de los fondos regionales durante los años 2004 a 2006, aunque empezará a perderlo a partir del 2007. De este modo, los ocho candidatos de Europa del Este, cuya renta per capita está entre el 28% de Letonia y el 69% de Eslovenia respecto a la media comunitaria, y cuyas regiones en su casi totalidad, con las únicas excepciones de Praga y Bratislava, se encuentran por debajo del 75% de la renta comunitaria (la mayoría están por debajo del 50%) se repartirán anualmente en los tres primeros años una cantidad equivalente a la que recibe España en solitario, con tres regiones por debajo del 75%. [13]

Los candidatos se han sentido tratados como europeos de segunda clase y han protestado tan enérgicamente como han podido por estas decisiones que les condenan a un largo periodo de adaptación en el interior de la UE. Pero sus bazas en la negociación son muy pequeñas, por no decir inexistentes, y sólo cuando pertenezcan al club tendrán posibilidades de influir en las decisiones comunitarias. Del mismo modo, los candidatos han tenido que aceptar que su futura incorporación se realice con cláusulas de salvaguardia que nunca antes había aplicado la UE a los nuevos miembros y que son fruto de la desconfianza de los comunitarios hacia la capacidad de los candidatos (o de algunos de ellos) para cumplir las normas de la UE en el terreno del mercado interior y de justicia y seguridad. Igualmente, los candidatos no han tenido más remedio que aceptar la imposición alemana y austriaca de una moratoria de siete años para la libre circulación de trabajadores entre sus países y la UE. Los temores a una inmigración masiva procedente de los candidatos se basan en la experiencia de los años noventa, cuando alrededor de 880.000 personas emigraron hacia Europa Occidental desde el Este en el periodo 1990-97 y el 80% de ellos se quedaron en Austria y Alemania. Sin embargo, lo sucedido en esos años fue el resultado de la apertura de fronteras que habían estado cerradas durante décadas (la mayoría de los emigrantes abandonaron su país entre 1990 y 1993) y de la crisis

económica, que en la primera mitad de los años noventa atravesó su peor periodo. Desde 1995 la situación económica está mejorando continuamente y los cálculos de la Comisión sobre el futuro de la inmigración proveniente de los candidatos prevén un descenso lento pero sostenido de ésta, desde unas 350.000 personas anuales en los primeros años a menos de 150.000 diez años después de la ampliación, hasta llegar en 2030 a representar un 1,1% de la población de los Quince (3,5% de la población alemana)[14]. Un dato indicativo al respecto es el limitado peso (15%) que tiene en las encuestas de opinión a los países candidatos la respuesta espontánea "viajar" o "trabajar en el extranjero" cuando se pregunta a la población en qué piensa cuando piensa en la UE, muy por debajo de la más corriente que habla de prosperidad y desarrollo económico (38%).[15] Es probable que estos temores a una inmigración masiva procedente de los candidatos del Este sean infundados, como lo fueron los que afectaban a los Estados del Sur (España, Grecia y Portugal) antes de su acceso a la CE, aunque la diferencia salTimes New Roman respecto a la CE era menos pronunciada en este caso.

Las tareas pendientes

De los informes anuales de seguimiento que la Comisión Europea realiza para cada uno de los candidatos se deduce que los ocho centroeuropeos invitados a incorporarse en el año 2004 poseen ya los rasgos definitorios de una democracia y una economía de mercado viable y son capaces de asumir el acervo comunitario, es decir, cumplen con los requisitos para la integración en la UE definidos en la cumbre de Copenhague de 1993. Todo ello implica que estos candidatos han realizado un enorme reajuste económico, político e institucional. Sin embargo, la Comisión señala varios elementos comunes deficitarios en los candidatos:

1.-Debilidad administrativa y corrupción

Uno de los elementos más sorprendentes que se han quedado al descubierto tras la crisis de los regímenes comunistas ha sido la debilidad de los Estados del área a la hora de regular sus sociedades. Aparentemente aquellos sistemas de economía estatizada casi al 100% indicarían la existencia de Estados fuertes, bien organizados y capaces de planificar y gestionar; en la realidad, los Estados comunistas constituían instrumentos sin autonomía ni cohesión en manos de la estructura, ésta sí cohesionada y bien jerarquizada, de los partidos comunistas, que formaban la auténtica espina dorsal que regulaba la vida social. Uno de los rasgos definitorios de esa debilidad estatal era la ausencia de derecho administrativo y de estatutos de la función pública, es decir, de normas definitorias de las relaciones entre los diferentes entes estatales y de éstos con sus empleados y con los ciudadanos. Tras la casi disolución de los partidos comunistas en 1989 y la ruptura del lazo de dependencia que formaba el Partido-Estado, esas debilidades de los aparatos administrativos quedaron a la luz y lo hicieron en medio de una situación de crisis económica que impedía destinar a la modernización de las estructuras estatales los fondos necesarios. Desde entonces se ha avanzado mucho en el terreno de la regulación, abordable sin grandes costes económicos, pero queda mucho por hacer en el campo de la provisión de servicios y la creación de nuevas agencias para intervenir en asuntos que no eran tratados en la etapa comunista, como la defensa del consumidor o del medio ambiente. En este segundo caso, por ejemplo, el retraso respecto a los estándares occidentales es enorme y el coste para adaptarse a la normativa comunitaria sobre medio ambiente se calcula en unos 100.000 millones de euros para todos los candidatos. Otro importante elemento deficitario que afectará a la UE es el de la prevención y represión de la delincuencia. En el pasado, la delincuencia común era minúscula en estos países, que sostenían su política policial sobre la ausencia de un Estado de Derecho. En condiciones democráticas, la represión de la delincuencia es mucho más difícil y cara, y el crecimiento de las actividades criminales que se ha producido en todos estos países en estos años ha desbordado la capacidad policial. Por último, las carencias administrativas dificultan las relaciones de los candidatos con la UE al disminuir sus posibilidades de absorber ayudas comunitarias que requieren equipos locales capaces de planificar, evaluar y desarrollar proyectos.

La corrupción es una de las notas comunes de los informes anuales elaborados por la Comisión Europea respecto a cada uno de los candidatos. Según el índice elaborado por Transparency International, la única organización dedicada a la medición y denuncia de la corrupción en el mundo, todos los países candidatos sufren una corrupción superior a la de los países miembros de la UE[16]. Sólo Italia y Grecia se encuentran por debajo del 6 (en una escala en la que 0 significa muy corrupto y 10 nada corrupto), la nota "de corte" que separa a los comunitarios de los candidatos. En esta escala destaca Rumanía, con la calificación más baja, un 2,6 y ocupando el puesto 77º sobre un total de 102 países estudiados. El resto se encuentra entre esa puntuación y el 6 de Eslovenia, muy cercana ésta a Portugal y Francia, ambas con un 6,3 (España recibe un 7,1, en la posición 20º). Los datos procedentes de encuestas realizadas a la opinión pública en la zona muestran igualmente una percepción generalizada de una corrupción muy extendida. Así, el 95% de los lituanos piensa que todos o casi todos los funcionarios de su país son corruptos, un porcentaje que sólo se encuentra por debajo del 50% en el caso de Eslovenia.

1.- ¿Hasta qué punto piensa usted que está extendida la corrupción en su país? Porcentaje que contesta que todos o casi todos los funcionarios son corruptos.		
2.- ¿Qué debería hacer una persona que necesita un permiso oficial si un funcionario le dice que sea paciente y espere? Porcentaje que contesta: dar propina, usar un enchufe, actuar sin el permiso		
	Funcionarios corruptos	No respetar las reglas
Lituania	95%	68%
Letonia	92%	51%
Rumanía	88%	53%

Eslovaquia	80%	55%
Bulgaria	74%	29%
Polonia	69%	26%
República Checa	66%	31%
Estonia	63%	45%
Hungría	54%	35%
Eslovenia	42%	29%
Media candidatos	73%	42%

Fuente: "A bottom up evaluation of enlargement countries". Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, Glasgow. 2002. Entrevistas realizadas en octubre y noviembre de 2001.

La corrupción es nota común a todos los países que han desmantelado un sistema económico de propiedad estatal para privatizar su actividad económica y ello al margen de la mayor fortaleza o debilidad de su Estado. El ejemplo chino de privatización económica y centralización política muestra que la corrupción parece inevitable cuando se ponen en marcha esos procesos masivos de privatización. China recibe una puntuación de 3,5 en la escala de Transparency International. Por otra parte, estos procesos masivos de privatización ocurren siempre en condiciones de crisis de los presupuestos estatales (excepto en el caso único de la RDA por su incorporación a la rica Alemania), lo que implica funcionarios subpagados al cargo de transferencias millonarias. Esta corrupción "transicional" debería ir disminuyendo en la medida en que el sector público decrece, aumenta el privado y se crea una economía de mercado, algo que ya ha ocurrido en los países candidatos. Sin embargo, las prácticas corruptas crean hábito y tienden a pervivir y a generalizarse hacia abajo en la pirámide jerárquica del Estado, especialmente si éste no puede garantizar sueldos suficientes. En último término, la corrupción se convierte en un impuesto que grava la actividad económica y puede estrangularla desincentivando, en primer lugar, la inversión directa exterior, como ocurre en Rumanía o, aún más claramente, en Rusia (ésta recibe un 2,7 en la escala de corrupción mencionada).

A falta de datos referidos a los primeros años noventa[17] no podemos saber hasta qué punto ha disminuido, si lo ha hecho, la corrupción al completarse el proceso privatizador, algo que ya ha ocurrido en los invitados a incorporarse en la primera ronda. Tampoco sabemos hasta qué punto pueden tomarse en serio los candidatos las advertencias de la Comisión en este punto, cuando, como se ha dicho, tanto Italia como Grecia resultan tan o más corruptos que varios de los candidatos, con una puntuación en la escala de Transparency International de 5,2 y 4,2 respectivamente, y Portugal y Francia se encuentran muy cerca del grupo en este aspecto.

2.- La relación con la población gitana

Aunque la Comisión habla genéricamente de los problemas de las minorías nacionales en los países candidatos, en realidad el problema grave que sigue pendiente de resolución es el que afecta a la minoría gitana (llamada *roma* o *romaní* en su idioma). Las otras dos grandes minorías que habitan en los países que se incorporarán en el año 2004, la rusa de los países bálticos y la húngara en Eslovaquia, han encontrado ya vías de acomodo y encaje en sus Estados respectivos, en buena parte como consecuencia de la presión de las instituciones europeas, lo que no implica que no exista un riesgo de conflictos.

Resulta imposible conocer con certeza el número de gitanos que habitan en los países candidatos y la cifra real debe estar entre los 2.800.000 de las estimaciones más bajas, a los 5.000.000 de las más altas.[18] Rumanía, con más de un millón y medio de gitanos, es su principal país de residencia, seguido por Bulgaria y Hungría (unos 600.000 en cada caso) y Eslovaquia (alrededor de 450.000). De todos los candidatos, Polonia es el que tiene un menor peso relativo de la población gitana, que no llega a 50.000 personas sobre un total de más de 38 millones. Estas poblaciones gitanas viven en su gran mayoría en condiciones de pobreza y marginalidad social mucho más notorias que las de la población gitana en España y puntúan mucho más alto que la media de sus conciudadanos en todos los indicadores de malestar: sus hijos están menos escolarizados y abandonan con más frecuencia el sistema educativo, las ocupaciones a las que acceden son las más descualificadas y peor pagadas, el paro entre ellos es mucho más alto, sus viviendas notoriamente peores y se encuentran en la cárcel en un porcentaje muy superior al de sus conciudadanos. Por otra parte, su natalidad es muy superior a la del conjunto, lo que se traduce en un peso demográfico cada vez mayor.

Cualquier conversación privada con personas no gitanas de los países candidatos sobre este tema nos transmite la convicción general (a veces captada en las encuestas[19]) de que los gitanos son los primeros responsables de su situación y de que ésta no es, por tanto, fruto de la discriminación sino de su propia tendencia a mantenerse viviendo en un mundo separado. Así lo expresó hace poco, en agosto del año 2000, el entonces ministro húngaro de Asuntos Sociales y Familiares, Peter Harrach, al declarar que el gobierno húngaro había hecho por los gitanos más de lo que éstos hacían por sí mismos. El presidente del gobierno, Viktor Orban, añadió que los gitanos debían estudiar y trabajar más[20]. Ésta era la respuesta del gobierno húngaro a la petición de asilo político en Francia de una comunidad gitana que alegaba malos tratos en su país.

Desde 1989 la violencia contra los gitanos ha aumentado (aunque precisamente Hungría ha sido uno de los países menos afectados), probablemente a causa del empobrecimiento de éstos -especialmente perjudicados en la reestructuración económica por su baja cualificación-, y debido a su participación en actividades delictivas que, a su vez, han crecido de forma espectacular desde 1989. Esta violencia, motivada igualmente por el empobrecimiento de

amplias capas de la población no gitana, no se ha dirigido sólo contra los gitanos sino, en general, contra todos los diferentes y pobres, lo que incluye a los inmigrantes del Este y del Sur que se han instalado en estos países. Pero indudablemente los gitanos constituyen el mayor grupo objeto de esa violencia, no sólo por parte de *skin heads* y otros grupos filonazis de adolescentes que proliferaron en los países candidatos a mediados de los noventa, sino en algunas, contadas ocasiones, por multitudes locales en una reedición de los *pogroms*.

El conflicto que enfrenta a las poblaciones mayoritarias con las minorías gitanas en cada uno de estos países es probablemente el aspecto más difícil de resolver de todos los que la Comisión Europea señala como defectos que deben superar los candidatos. No se trata de un problema "transicional" que vaya a arreglarse por sí mismo con un mayor desarrollo económico, y las medidas de política social tienen una eficacia muy limitada para resolverlo. A instancias de la Comisión todos los candidatos han puesto en marcha programas específicos destinados a la población gitana, educativos, de vivienda, ocupacionales o de combate contra los estereotipos con que se percibe a los gitanos. La Comisión reconoce estos esfuerzos gubernamentales pero señala a la vez que la situación de marginación continúa, aunque en los últimos años la violencia contra los gitanos ha disminuido notablemente. Por su parte, las minorías gitanas, a diferencia de otras minorías nacionales que a menudo son mucho más pequeñas, han sido incapaces de organizarse políticamente de modo eficaz en ninguno de los países del área y ello es otro elemento más que dificulta su integración social. Por último, la "cuestión gitana" no sólo afecta a los candidatos internamente y en sus relaciones con la Comisión: afecta a su imagen en Europa Occidental por la vía de la inmigración gitana, procedente sobre todo de Rumanía, y que, por ello, la opinión pública occidental tiende a asimilar a la población rumana en conjunto. De hecho, es muy probable que el mayor rechazo que los países miembros de la UE expresan hacia Rumanía como candidato a la integración (el más rechazado después de Turquía) en comparación con los demás candidatos, esté basado en la experiencia occidental con la inmigración gitana rumana[21]. Los inmigrantes gitanos son mucho más visibles en las ciudades europeas que los inmigrantes rumanos no gitanos, tanto por su indumentaria como por su "ocupación" en la mendicidad callejera y despiertan un amplio rechazo entre la población local, ya con dificultades para la convivencia con sus propios conciudadanos gitanos.

Opinión pública y temores asociados a la integración. El europeísmo de los candidatos

Además de territorios, poblaciones y mercados ¿qué aportan los candidatos del Este a la Unión Europea? ¿Con qué proyectos, ideas o perspectivas nuevas se incorporan? La realidad es que en este momento los candidatos tienen una actitud esencialmente instrumental hacia la Unión Europea, que conciben como un artefacto capaz de beneficiar a sus intereses nacionales. No existe en ninguno de los candidatos un pensamiento europeísta capaz de generar propuestas para el conjunto de Europa. Los países de la zona están demasiado ansiosos respecto a su propia posición ante la UE y han sufrido desde 1989 un proceso muy doloroso, en términos de costes sociales, con una transición económica mucho más dura que la experimentada en los países de la Europa del Sur para su adaptación a la CE. Por otra parte, su alejamiento de las instituciones occidentales, de Europa occidental en conjunto, durante más de cuarenta años, deja como herencia una completa falta de reflexión sobre esas instituciones, sobre la comunidad de intereses europeos o sobre la identidad de esta nueva Europa. Se ha dicho[22] que los candidatos posiblemente aporten a la UE más nacionalismo y menos europeísmo y es muy probable que así sea, pero difícilmente podría esperarse otra cosa dadas sus historias nacionales que pueden resumirse en la imagen de peces chicos siendo comidos una y otra vez por diferentes peces grandes. Sólo cuando esta ansiedad nacional histórica desaparezca o se debilite –lo que ocurrirá probablemente después de años de pertenencia a la UE– podría esperarse de los candidatos orientales una actitud más europeísta.

En otro sentido, los esteuropeos son más "europeístas" que los países ya miembros: las encuestas de opinión muestran ahora un optimismo respecto al efecto que la adhesión a la UE tendrá en sus países, muy superior a la percepción de ventajas para su país por parte de los que ya son miembro. De la misma forma, la imagen de la Unión Europea es más positiva en los países candidatos que en los miembros. El 52% de los ciudadanos en los países candidatos tiene una imagen positiva global de la UE, mientras que en los Estados miembros este porcentaje es del 42% [23]. La diferencia es aún mayor si se compara a la población en general de los países candidatos con los jóvenes comunitarios. El 69% de los primeros afirman que "la Unión Europea es un medio para crear un futuro mejor para la gente joven", mientras que sólo el 28% de los jóvenes comunitarios comparte esa opinión.

El proceso de acercamiento a la Unión Europea conlleva una importante cesión de soberanía que se produce inmediatamente después de la recuperación de ésta en 1989, una soberanía conferida de hecho, aunque no *de iure*, a la Unión Soviética durante más de cuarenta años. Si retrocedemos en el tiempo, encontramos naciones que han gozado de muy cortos periodos de independencia: tanto polacos, como checos, eslovacos y bálticos crearon sus propios Estados por primera vez después de la Primera Guerra mundial.[24] Hungría, semi independiente dentro del Imperio austrohúngaro, sólo consiguió su estatalidad plena al disolverse éste en 1918; Rumanía, independiente desde 1881, consiguió su territorio actual, con la incorporación de Transilvania, también en 1918 y Bulgaria es independiente desde 1885. Todas las naciones de la zona comparten una historia de recelos mutuos, continuos cambios de fronteras y sobre todo, de subordinación durante siglos a las potencias rivales vecinas: Imperio Otomano, Imperio Austriaco y luego Austrohúngaro, Prusia, Alemania, el Imperio zarista, la Unión Soviética. Esta historia ha dejado como legado un fuerte nacionalismo que se sostiene sobre la ansiedad respecto al reconocimiento internacional, un nacionalismo que no ha sido aún atemperado por la modernización, paralizada por el experimento comunista. ¿Cómo casa ese nacionalismo con el proceso de integración en la UE? Hasta ahora nacionalismo y europeísmo se han adaptado bien porque, como se ha dicho, "el regreso a Europa" se presenta como el principal objetivo nacional. Las poblaciones y las elites de la zona son meridianamente conscientes de la situación de inferioridad de sus países respecto a Europa Occidental y de que ese acercamiento a la UE constituye la única vía posible para alcanzar niveles de desarrollo semejantes a los occidentales. Por todo ello, en estos momentos, la reparación del orgullo nacional, herido durante años, exige el fin de la excepcionalidad y la conversión en "normales"

de sus países, lo que incluye el rechazo al epíteto "oriental" que los asimila a otras naciones situadas más al Este y que los candidatos consideran inferiores en su desarrollo e históricamente enemigas.

Esto constituye la corriente mayoritaria del pensamiento y de las actitudes en cualquiera de los países de la zona pero, en varios de ellos, las dificultades experimentadas para adaptarse a las exigencias de la UE han hecho disminuir el apoyo a la integración, y a la vez han alimentado la aparición de partidos políticos, de mayor o menor fuerza electoral, que tienen en el antieuropeísmo una de sus principales señas de identidad. Es el caso del Partido de la Gran Rumanía, que obtuvo el 22% de los votos en las elecciones de noviembre del año 2000, del Partido Húngaro de la Verdad y la Vida, que en las elecciones de abril de 2002 obtuvo el 4% de los votos y de varios de los partidos polacos que consiguieron representación en las elecciones de septiembre del 2001, como el grupo Autodefensa (10%) y la Liga de Familias Polacas (8%). En el caso de Polonia, las dificultades que atraviesa la agricultura para competir con la penetración de productos agrarios occidentales y para adaptarse a las normas de la UE son la causa fundamental del antieuropeísmo. Como es sabido, Polonia tiene una agricultura minifundista y poco eficaz que ocupa al 25% de la población (aunque una parte de éstos son agricultores a tiempo parcial) y sólo produce el 6% del PNB. La agricultura, además, ha actuado como colchón amortiguador del desempleo causado por las reestructuraciones industriales[25], por lo que sus dificultades tienen un efecto social muy amplio.

Junto a estas manifestaciones de un rechazo genérico a las imposiciones de la UE sobre la vida nacional, existen motivos más concretos de preocupación, también de índole nacional, relacionados con la integración: el problema de las minorías nacionales que quedarán fuera de la UE, y el temor a que las pequeñas economías nacionales queden engullidas por fuerzas económicas foráneas. Un componente de esto último es el miedo a una compra masiva de terrenos por parte de alemanes o austríacos que ha llevado a los países limítrofes con Alemania o Austria a proteger su mercado del suelo, de precios mucho más bajos que los occidentales, obteniendo de la UE una moratoria de siete años para la libre adquisición de terrenos por comunitarios (Dinamarca ingresó también en la CE con una moratoria semejante por temor a una compra masiva de suelo por los alemanes).

La pertenencia a la Unión Europea y al espacio de Schengen obligará a los candidatos a revisar su política exterior respecto a los vecinos orientales o meridionales que, o no son candidatos, o no podrán entrar antes de 2007, impermeabilizando unas fronteras que en algunos casos se han hecho porosas durante los años noventa. Polonia y Hungría tienen importantes minorías nacionales en los países vecinos: 260.000 polacos en Lituania, 420.000 en Bielorrusia y 220.000 en Ucrania, y 1.800.000 húngaros en Rumanía, 600.000 en Eslovaquia, 300.000 en Serbia y 200.000 en Ucrania[26]. Tanto el Estado polaco como el húngaro han desarrollado políticas exteriores en la democracia dirigidas a proteger la identidad cultural-nacional de esas minorías y a profundizar sus relaciones con ellas, que son ya especialmente fuertes en el caso húngaro, probablemente porque su desgaje del Estado-madre es más reciente: se produjo en 1920, fecha del Tratado de Trianon, que redujo a un tercio el territorio de Hungría. La futura pertenencia al espacio de Schengen está obligando a los candidatos a proceder a un cierre de fronteras hacia el Este y el Sur que contradice esa política de puertas abiertas que se había puesto en marcha desde 1989 para facilitar los contactos con las minorías y el pequeño comercio fronterizo que, en el caso polaco, se ha estimado en unos 3.000 millones de dólares al año y está protagonizado por miles de lituanos, ucranianos o bielorrusos que se ganan la vida aprovechando la diferencia de precios y de oferta de bienes de consumo, comprando y vendiendo a uno y otro lado de la frontera polaca[27]. El temor de la UE a que esas fronteras se conviertan en puertas abiertas para una entrada masiva de inmigrantes y para la penetración de redes criminales provenientes del Este, plantea a los candidatos la difícil disyuntiva de sacrificar sus relaciones con el Este para mejorar las occidentales. En el caso húngaro, la controvertida Ley de Estatus[28] es, entre otras cosas, un intento de compaginar la impermeabilización de fronteras con Rumanía, Serbia y Ucrania con las facilidades de tránsito hacia Hungría de las minorías húngaras de cada uno de estos países.

Junto a estos temores, aparecen en la opinión pública de los candidatos otros miedos asociados con la integración en la UE que coinciden a menudo con los temores expresados hacia ésta por los que ya son miembros. Así, por ejemplo, el 55% de los entrevistados en los países candidatos piensa que la entrada en la UE hará aumentar en su país el tráfico de drogas y el crimen organizado, es decir, considera que en la UE estos delitos están más extendidos que en su país, mientras que un porcentaje casi idéntico de los entrevistados comunitarios (56%) opinan que la ampliación hará aumentar esos delitos en la UE, es decir, que los candidatos están más afectados por ellos. Los otros dos principales temores en la opinión pública de los candidatos, relacionados con la integración, son el alto coste que ésta tendrá para su país (50%) y las dificultades que provocará a los agricultores locales (46%). También en este caso es un temor compartido con los países miembros de la UE: un 60% de los entrevistados comunitarios piensa que la ampliación perjudicará a los agricultores de la UE mientras que en el caso polaco el 64% opina que serán sus agricultores los perjudicados[29]. Ésta es una muestra de las dificultades que experimenta la UE para hacer socialmente visibles los resultados de sus políticas y de su propia existencia.

Estos tres temores, la extensión del crimen, el alto coste y el perjuicio para la agricultura, son los más señalados en todos los países de la primera ronda de ampliación hacia el Este (Turquía, Chipre y Malta expresan preocupaciones diferentes). Llamativamente, los candidatos del Este que, eventualmente, se incorporarán a la UE más tarde (Bulgaria y Rumanía) muestran mucho menor temor hacia ese futuro, lo que se explica precisamente porque es un escenario todavía lejano y su adaptación a las normas comunitarias es aún incipiente. Es decir, hasta ahora la percepción de costes es mínima.

En conjunto, todos los candidatos señalan menos temores hacia la UE que los entrevistados en los países comunitarios, ya se trate del final de la moneda nacional

(42% en los 13 candidatos y 58% en los Quince de la UE), la pérdida de la identidad y la cultura nacionales (32% y 47% respectivamente), la pérdida de beneficios sociales (23% y 51%), el menor uso de la propia lengua (38% y 42%) o el traslado de los puestos de trabajos a países de menores costes salTimes New Romanes (36% en los candidatos, una respuesta llamativa que se da sobre todo en los más ricos de entre éstos, probablemente temerosos de ese traslado hacia los menos desarrollados, y 60% en los Quince). Las diferencias en esta última respuesta expresan una percepción de un riesgo real ya sustanciado en varias ocasiones, especialmente en la industria automovilística que ha trasladado -o planea hacerlo- parte de su producción desde un país de la UE, como la propia España, hacia alguno de los países candidatos en el Este. Sin embargo, las diferencias en todas las otras respuestas indican únicamente una mayor confianza global en la UE en los países candidatos frente al escepticismo o el rechazo de los países miembros.

Este mayor "euroentusiasmo" de los candidatos frente a los ya miembros se aprecia también cuando se pregunta a los entrevistados por el balance de costes y beneficios personales que les depara o creen que les deparará la pertenencia a la UE. Así, un 42% de la población de los 13 países candidatos piensa que la pertenencia a la UE será ventajosa o muy ventajosa para ellos personalmente, porcentaje que en los países miembros es del 29%. Por el contrario, entre los países miembros la respuesta más frecuente es la de aquellos que ven tanto ventajas como desventajas en su pertenencia a la UE (41%), a lo que hay que sumar un 16% que considera netamente desventajosa esta pertenencia. En los países candidatos estos porcentajes son respectivamente del 23 y el 14%.[\[30\]](#) Los países con mayores expectativas son los que están más lejanos de la integración (Turquía y Rumania), donde la mitad de los entrevistados contesta que esperan obtener beneficios personales de la integración.

Por grupos sociales, los más optimistas respecto al efecto de la UE son los más jóvenes y los de mayor nivel educativo, optimismo que se reduce al aumentar la edad o al disminuir el tamaño del hábitat, y es mucho menor entre las mujeres que entre los hombres, todo lo cual es perfectamente coherente con el mayor o menor beneficio personal obtenido en este proceso general de transformación social y económica. Son los grupos más jóvenes, mejor formados y urbanos los que están recibiendo en primer lugar los beneficios de la entrada de capital extranjero, de la privatización y de la creación de nuevas empresas. En el extremo contrario se encuentran los ancianos, dependientes de las pensiones de jubilación, miserables en gran parte, y, en general, todos los que viven de los fondos estatales, funcionarios, parados u otros que reciben subsidios. En este grupo las mujeres están sobrerrepresentadas[\[31\]](#). Las grandes ciudades, las capitales en primer lugar, han experimentado también un despegue económico muy superior al de las zonas rurales, sobre todo al de las orientales, más alejadas geográficamente de la influencia económica de Europa Occidental. Por otra parte, en muchas pequeñas ciudades se vive todavía la crisis producida por el cierre de industrias que dejaron de ser rentables a finales de los años ochenta y a menudo el desempleo en ellas es muy alto.

En conjunto, la confianza en la UE es alta a pesar de que el apoyo neto a la integración ha disminuido notoriamente en los candidatos de Europa del Este desde principios de los noventa, cuando era amplísimo (e ignorante). Sólo en los dos países más atrasados en su acercamiento a la UE, Bulgaria y Rumanía, ha aumentado, en lugar de disminuir, el apoyo a la integración. En cualquier caso, incluso allí donde el apoyo a la integración es menor del 50% (Estonia y Letonia), este grupo es muy superior al de los contrarios a la integración, con un alto porcentaje de indecisos, lo que permite suponer resultados positivos en el caso de que se celebren referendos para la adhesión.

Evolución del apoyo al ingreso de su país en la Unión Europea				
	1991 En contra	1991 A favor	2001 En contra	2001 A favor
Lituania	1%	88%	19%	51%
Checoslovaquia	5%	84%	17% Rep. checa 11% Eslovaquia	54% Rep. checa 65% Eslovaquia
Hungría	4%	83%	10%	71%
Estonia	3%	80%	25%	39%
Rumanía	1%	79%	2%	84%
Polonia	4%	79%	26%	55%
Letonia	3%	78%	31%	47%
Bulgaria	3%	76%	4%	80%

Fuente: Central and Eastern Eurobarometer, nº 2 (1992) y Eurobarometer, Public Opinion in the Candidates Countries, otoño 2001[\[32\]](#)

El aislamiento mutuo

Una pesada herencia de la etapa comunista es la escasez de contactos entre los países de Europa del Este. A diferencia de los países occidentales que han vivido ya casi medio siglo de cada vez más estrechos contactos comerciales y políticos, en un proceso que afecta incluso a los países no integrados o recientemente llegados a la UE, la experiencia en el Este desde 1945 es, al contrario, de aislamiento. Ni el Pacto de Varsovia ni el COMECON, creados como réplicas a la OTAN y la CECA respectivamente, funcionaron nunca como estructuras horizontales de cooperación, aunque lo fueran formalmente, sino como órganos de coordinación subordinados a la dirección soviética. Las relaciones militares y comerciales en el seno del Pacto de Varsovia y del COMECON eran en su gran

mayoría bilaterales, de cada uno de los países miembros con la URSS. No existió nunca nada parecido a la libertad de movimientos en el interior del área y, al contrario, las fronteras internas se mantenían fuertemente vigiladas.

La experiencia de subordinación a la URSS se compensó con el cultivo de un narcisismo nacional en el que cada país se auto comparaba con la URSS, o con Rusia en el caso de los países bálticos (y salía ganando en la comparación) e ignoraba del todo a los vecinos. Por otra parte, no puede responsabilizarse únicamente al periodo comunista de esta herencia: las relaciones de los Estados de la zona desde su tardía creación en el siglo XIX o en el XX, han sido continuamente de fricción por la escasa legitimidad histórica de las fronteras y por los problemas originados en torno a las minorías nacionales. Estas tensiones fueron en el pasado azuzadas por las potencias occidentales (Francia, Prusia, Alemania, Austria, Inglaterra) y orientales (Rusia), a la búsqueda de aumentar su influencia en la zona cuando no de anexionarse territorios. La inseguridad y el temor a los vecinos con que nacieron muchos de los Estados de la zona se mantuvo durante todo el siglo XX y el periodo de la *pax soviética* congeló esas disputas sin hacer nada por mejorar las relaciones en el área. El resultado es la mutua desconfianza generalizada, especialmente entre los países que comparten frontera.

Signo palpable de este aislamiento es, por ejemplo, la gran escasez de individuos que entiendan y hablen otros idiomas del área. La enseñanza de esos idiomas es prácticamente inexistente, excepto entre minorías nacionales (por ejemplo, el estudio del húngaro entre los húngaros de Rumanía), una excepción que obviamente no indica interés por otra cultura. Los contenidos de información internacional de los medios de comunicación muestran igualmente el desinterés mutuo: la información relativa a los países vecinos es mínima y limitada a los aspectos que pueden afectar al país de los lectores. Resultaba muy llamativo, por ejemplo, en los años de las guerras yugoslavas, comprobar cómo el gran espacio informativo que recibían en Occidente se convertía en apenas unas breves notas en Europa del Este, excepto en los elementos que afectaban a los países vecinos, como las consecuencias del bloqueo comercial a Serbia para la economía búlgara o el tráfico en el Danubio. Desde la crisis de 1989 el "interés informativo" se ha dirigido a Occidente, tanto en el terreno político y económico como en el cultural.

La ficción de la cooperación regional en las estructuras internacionales del periodo comunista fue sustituida a partir de 1989 por la rivalidad descarnada entre los países de la zona para conseguir una mejor posición en sus intercambios con Occidente y para situarse en cabeza de la carrera para la integración en la CE-UE. A la vez que negociaban acuerdos de asociación con la CE y pugnaban por calificarse como candidatos a la adhesión, los países de la zona levantaron nuevas barreras aduaneras a los productos de los países vecinos mientras que se desarmaban arancelariamente frente al mercado occidental. El resultado fue que el comercio interno pasó de representar el 47% de las exportaciones en 1989 al 23% en 1995 (comercio dirigido desde los países candidatos hacia ellos mismos o hacia las repúblicas exsoviéticas); los datos relativos a las importaciones son prácticamente iguales (48% y 24% respectivamente)[33]

La tendencia a la negociación en solitario de cada uno de los países del área con la CE fue rechazada por los negociadores comunitarios, que preferían establecer un marco común, al menos de los países que contaban con mejores y más claras posibilidades de integración. De la misma forma, los comunitarios resaltaban el carácter negativo e incoherente de la disminución del mercado entre países limítrofes que aspiraban a su entrada en la CE. En buena parte, por esa presión europea y en otra por las consecuencias sobre el PNB de cada país de esa caída del mercado interior regional tras la disolución del COMECOM, se produjo el 15 de febrero de 1991 el primer encuentro de Jefes de Estado y de gobierno de Polonia, Checoslovaquia y Hungría en la ciudad húngara de Visegrado. El llamado desde entonces Grupo de Visegrado nació con el objetivo explícito de coordinar la negociación con la CE, aunque actuó también como foro de cooperación en las relaciones con la URSS y luego con Rusia, con la que aún quedaban importantes asuntos que cerrar, como la retirada de las tropas soviéticas y la negociación sobre la valoración de las instalaciones que dejaban y sobre el coste de la propia retirada.

El logro principal de este foro de cooperación fue el acuerdo en diciembre de 1992, firmado en Cracovia, para formar un mercado común libre en el año 2001, un acuerdo al que se sumaron posteriormente Eslovenia (1996), Rumanía (1997) y Bulgaria (1999) y en el que aspiran ahora a ingresar los tres países bálticos, Ucrania y Croacia. Las condiciones para entrar son haber firmado un acuerdo de asociación con la UE, ser miembro de la OMC y contar con el beneplácito de los miembros. La decisiva influencia de la CE-UE en la creación del grupo es reconocida oficialmente en sus documentos: "At the EU's recommendation, the future members are to prepare for joining the EU by establishing free trade areas". [34] En cualquier caso, la vocación de provisionalidad del así llamado CEFTA (Central European Free Trade Agreement), que se concibe a sí mismo como una mera herramienta en el camino hacia la integración en la UE, ha tenido como resultado el rechazo a cualquier forma de institucionalización: CEFTA carece de secretariado conjunto y de sede.

La creación del CEFTA se tradujo en 1993 en una reducción del 40% de los aranceles de productos industriales, elevada al 50% en 1994 y al 80% en 1996. La reducción en los productos agrarios, más débiles ante la competencia exterior, ha sido mucho más lenta. A pesar de la reducción de aranceles no se ha conseguido una recuperación del mercado interior del área pero al menos se ha detenido su declive. Así, en 1998, el 6% del comercio exterior polaco se realizaba dentro del CEFTA, un porcentaje que era del 9% para la economía húngara, del 10% para la eslovena y del 15% para checos y eslovacos a causa del mantenimiento de fuertes lazos económicos entre ambas repúblicas, con un acuerdo bilateral de libre comercio que ha formado una unión aduanera.[35] Como comparación, en 1992, el 22% de las exportaciones húngaras, el 11% de las polacas y el 30% de las eslovenas se dirigían a países del COMECOM[36], es decir, el comercio interior se ha reducido globalmente en más de un 50% desde 1992. En esa fecha, las exportaciones de estos países a Rusia eran ya casi inexistentes, de modo que el descenso de los datos expresa cambios en el comercio interior de Europa Central Oriental.

En cualquier caso, la virtualidad política del grupo de Visegrado ha sido muy pequeña, especialmente tras la disolución de Checoslovaquia en 1993. Las relaciones de Hungría con Eslovaquia han sido tirantes desde su independencia a causa de la minoría húngara (unas 600.000 personas, 11% de la población eslovaca) y del conflicto en torno a la construcción de la presa de Gabčíkovo-Nagymaros en el Danubio y la alteración del curso y el caudal del río que sirve de frontera entre Eslovaquia y Hungría. Por otra parte, durante varios años los gobiernos checos dirigidos por el liberal Vaclav Klaus, en clara disonancia con el espíritu "centro europeísta" del Presidente Vaclav Havel, adoptaron una posición de desapego y rechazo a la coordinación con los países vecinos. Así, en unas declaraciones de 1993, Vaclav Klaus señaló que el grupo de Visegrado era "un proceso artificial creado por Occidente" y que la República Checa podría estar lista para integrarse en la CE "en dos o tres años"[\[37\]](#). En aquellos años (1993-1997) la República Checa gozaba de prestigio entre las instituciones comunitarias y financieras internacionales porque sus indicadores económicos parecían convertirla en el país de mayor éxito en su transición a la economía de mercado, hasta el punto de que los dirigentes checos se atrevían entonces a "dar lecciones" de liberalismo a los comunitarios. En ese contexto, los checos consideraban que su asociación con los vecinos excomunistas perjudicaba su imagen y sus posibilidades de acceso rápido a la UE, y esta actitud manifiesta supuso la paralización del grupo de Visegrado como foro político. Sin embargo, en 1997 el supuesto milagro checo se vino abajo y dejó al descubierto lo que había sido un proceso ficticio de transición económica: la supuesta privatización de la actividad económica era sólo nominal y el modelo de reparto universal de acciones a la población se había convertido, vía su posterior adquisición por sociedades financieras participadas por el Estado, en una forma de re-estatizar la propiedad empresTimes New Roman. De esta forma se mantenían las alianzas de intereses que en el periodo comunista habían impedido el cierre de empresas no rentables, con el resultado estadístico aparente de una transición modélica con un coste social muy bajo. En 1997, la brusca caída de la corona checa obligó a reconocer al gobierno de Vaclav Klaus que el país estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades e iniciar un plan de austeridad que debería haber sido puesto en marcha en 1990.[\[38\]](#) A partir de aquí, la República Checa desarrolló nuevas medidas para crear una auténtica economía de mercado y el país dejó de ser considerado en los foros internacionales como el modelo centroeuropeo. En ese mismo año 1997 en que los checos se veían obligados a recibir una lección de humildad, la OTAN anunció, en su reunión de Madrid en julio, su invitación a Hungría, la República Checa y Polonia para que se incorporaran a la organización y casi simultáneamente la Unión Europea decidió abrir las negociaciones para la adhesión de los tres países. Todo ello contribuyó a incentivar la cooperación en el grupo, ya que las decisiones de la OTAN y la UE convertían en irracional la competencia entre los tres países para situarse en cabeza de ambas integraciones. Por otra parte, el cambio de gobierno en la República Checa tras las elecciones de 1998, que dieron la victoria al partido socialdemócrata, mucho más favorable que el liberal a la cooperación con los vecinos centroeuropeos, despejó uno de los elementos que impedían la cooperación. De hecho, el grupo de países que se reunió en Visegrado en 1991, esto es, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, planea ahora mantener su cooperación más allá de la integración en la Unión Europea siguiendo el modelo del Benelux[\[39\]](#).

Desde 1989 han aparecido otras iniciativas de cooperación regional con un peso específico mucho menor que el del CEFTA, como la Iniciativa Centroeuropea, la Euroregión de los Cárpatos, el Consejo Báltico y la Cooperación Económica del Mar Negro[\[40\]](#). La Iniciativa Centroeuropea se creó en 1989 y agrupaba a Italia, Austria, Hungría y Yugoslavia, con un programa de cooperación en asuntos fronterizos, como medio ambiente, telecomunicaciones y transporte. En la actualidad reúne a 16 países, algunos tan orientales como Moldavia o Bielorrusia, y su principal haber es la estrecha colaboración con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, al que proporciona guías de actuación en sus inversiones. La Euroregión de los Cárpatos, creada en 1993, coordina entidades subnacionales de cinco Estados (Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania) y se ocupa de proyectos locales de desarrollo y de protección medioambiental en la zona de los Cárpatos. En 1990 Turquía propuso la formación de un Consejo del Mar Negro, formalmente establecido en 1992 entre Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Ucrania y Turquía. La gran heterogeneidad de sus miembros y de sus intereses ha dificultado la toma de decisiones respecto a lo que se presentaba básicamente como un esfuerzo de coordinación económica, y el mercado y las relaciones bilaterales entre los miembros del grupo son muy escasas. Por otra parte, el intento turco de establecer una influencia duradera sobre las repúblicas exsoviéticas musulmanas y de idiomas cercanos al turco ha resultado fallido, ya que Turquía carece de los medios económicos para convertirse en una potencia regional.

El Consejo de los Estados del Mar Báltico, creado en 1992, reúne a todos los países ribereños, la Federación Rusa, Alemania, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia e Islandia más la Comisión Europea.[\[41\]](#) Su objetivo expreso es la cooperación económica, medioambiental, de seguridad civil y fronteriza y ha cumplido un importante papel como institución liderada por los bálticos ya comunitarios en la promoción de la candidatura a la integración en la UE de Estonia, Letonia y Lituania. Los lazos culturales e históricos de estos tres países son fuertes con Suecia (a cuya corona pertenecieron Estonia y Letonia en el siglo XVII) y con Alemania. Los tres países bálticos, pero especialmente Estonia y Letonia, han estado muy germanizados por la presencia de la Orden de los Caballeros Teutónicos en su suelo desde el siglo XV y su pertenencia a la Liga Hanseática. El dominio de la cultura alemana en la zona sólo comenzó a declinar cuando el nacionalismo ruso se enfrentó a él en el siglo XIX clausurando las Universidades de habla alemana y haciendo obligatorio el uso del ruso en todas las etapas educativas. Lituania tiene una historia diferente en la que el papel alemán es menor y la influencia polaca muy superior.

La intermediación de Alemania

En contra de lo que polacos, checos, húngaros y varios otros hubieran deseado, Alemania se convirtió a partir de 1989 en la potencia sin rival en la zona, no sólo como socio comercial e inversor sino como intermediario político, un

papel este último que ya venía desempeñando desde los tiempos de la *Realpolitik* de Billy Brandt, cuando la RFA se erigió en intermediaria entre el Este y el Oeste. Alemania es indudablemente el país de la UE más sensible a los problemas, riesgos y necesidades de sus vecinos orientales, obviamente por su cercanía, pero además por algunas otras razones:

. La reunificación convirtió a la nueva Alemania en heredera del mercado con el Este que se dirigía antes a o desde Alemania Oriental. Antes de 1989, la RDA era el segundo socio comercial para los países de la zona, después de la URSS. La RFA era el tercero. Además, la existencia de la Alemania comunista implicaba para los alemanes occidentales un conocimiento de los mecanismos, las costumbres y el funcionamiento de una sociedad de este tipo muy superior al que tenía ningún otro país occidental.

.En toda Europa del Este, hasta el Vólgota, han existido importantes comunidades alemanas, cuya presencia se remontaba a la Edad Media. Su papel como creadores de ciudades y difusores de la modernización chocó en el siglo XIX con los nacionalismos locales nacientes, y después de la Segunda Guerra mundial, con la excusa de su (imaginada o real) colaboración con las tropas nazis, unos catorce millones de alemanes fueron expulsados del área. Pero continuó existiendo una presencia alemana significativa que ha sido motivo de interés del Estado alemán hacia la zona.

.La generosa política de refugiados que Alemania mantenía a principios de los años noventa, convirtió su territorio en destino de cientos de miles de empobrecidos habitantes de Rumanía, Bulgaria, las repúblicas exyugoslavas y las exsoviéticas. En la actualidad, tres quintas partes de la inmigración que ha llegado a la UE procedente del Este de Europa (unas 880.000 personas en total) se encuentra en Alemania.

Realizando una profecía que se ha auto cumplido, los restantes europeos occidentales estaban convencidos a principios de los años noventa de que Europa del Este era "terreno alemán", (con algunas excepciones como la tradicional influencia francesa en Rumanía o la italiana en Eslovenia) lo que se tradujo en una inhibición general a la espera de que empresarios, banqueros, asesores y políticos alemanes ocupasen los puestos. Y eso es lo que ocurrió, con el resultado de que ahora Alemania es con gran diferencia el principal socio comercial e inversor en la zona, del que procede el 25% de las importaciones y el 20% de la inversión directa[42] (en Hungría y la República Checa esta participación es mucho más alta: entre el 30 y el 40% del comercio exterior se efectúa con Alemania y el 40% de la inversión exterior directa es alemana[43]). Mientras tanto, el idioma alemán se encuentra a la par con el inglés en el dominio de lenguas extranjeras. Varios de los países de la zona –notoriamente Polonia y la República Checa– hubieran preferido una relación más multilateral con Europa Occidental, es decir, no tan canalizada a través de Alemania, respecto a la que tienen razones históricas para la desconfianza[44]. No sólo los países que han sido en el pasado víctimas del expansionismo alemán sino también otros que fueron aliados-rehenes en la etapa de entreguerras y en la Segunda Guerra mundial, como Hungría o Rumanía, tienen importantes corrientes germanófilas y, en cualquier caso, todos ellos preferirían diversificar sus alianzas en Europa Occidental.

En consonancia con este proceso de incursión económica, Alemania se convirtió en la UE durante la primera mitad de los años noventa en el principal defensor de una rápida y extensa ampliación hacia el Este. Su actuación en el caso de Croacia y Eslovenia, esto es, su decisión unilateral de reconocer a ambas repúblicas sin esperar a un consenso europeo sobre el tema, en una postura que ha sido muy criticada como imprudente desde Europa Occidental, fue sin embargo vista desde Europa del Este como prueba del compromiso alemán con el área y fortaleció su prestigio político y su liderazgo en la zona.

Paradójicamente, cuando la ampliación pasó a convertirse en una realidad inminente, el problema de los costes se situó en el primer plano de la actuación alemana. Alemania, como principal contribuyente a las arcas comunitarias, se convirtió a partir de 1999 en el principal escollo a la ampliación al proponer que ésta se realizase a coste cero, lo que implica una redistribución de los fondos existentes y por tanto una disminución de las ayudas que reciben los países ya miembros, y que finalmente ha sido pactada en la reciente cumbre de Bruselas de octubre de 2002.

Conclusiones: Los riesgos de la no ampliación. La UE como agente pacificadora

¿A qué se debe que estos ocho países hayan logrado consolidar sistemas democráticos pese a carecer en su mayoría de tradiciones pluralistas, en medio de una fuerte crisis económica, sin una clase media de ingresos independientes del Estado y con una pesada herencia comunista?. La respuesta obvia es su voluntad y su necesidad de incorporarse a la Unión Europea. Sin ese factor exterior resulta inexplicable ese triunfo de la democracia cuando todos los elementos económicos, culturales o políticos habrían hecho mucho más probable en buena parte de estos países una salida autoritaria o caótica. Algo semejante puede decirse respecto a la economía de mercado: sin la presión de la UE las transformaciones económicas se habrían dirigido más probablemente hacia el modelo chino, en el mejor de los casos, y hacia el albanés en el peor, es decir, hacia una economía de mercado muy intervenida por el Estado o hacia una economía en manos de organizaciones criminales.

La UE podría haber tolerado sistemas autoritarios en sus fronteras orientales (de hecho ya lo hizo hasta 1989), pero le habría resultado mucho más difícil aceptar sistemas inestables que, a diferencia de los comunistas, no quieren ni pueden impedir la salida de sus ciudadanos hacia Occidente. En este sentido, el factor crucial fueron las guerras yugoslavas y la miniguerra civil albanesa de 1997 con su resultado de oleadas de refugiados. La UE entendió que era necesario intervenir para evitar la importación a su propio terreno de las inestabilidades de sus vecinos.

Además de democratizador e impulsor de la economía de mercado, la UE se ha convertido en el principal agente pacificador de los conflictos regionales en el área, que son en su casi totalidad conflictos relacionados con las minorías nacionales. La situación de las minorías rusas en Estonia y Letonia, de la húngara en Rumanía, Eslovaquia y Serbia o de la turca en Bulgaria, ha mejorado notablemente a causa de la presión de la UE, en términos de

reconocimiento de sus derechos culturales y políticos[45]. El caso más notorio es el de los rusos en Estonia, donde suponen el 29% de la población, y en Letonia (33%), y que se enfrentaban a principios de los años noventa con políticas nacionales que les negaban el derecho a la ciudadanía y al voto. La presión de la UE, ejercida indirectamente a través de la OSCE y del Consejo de Europa, consiguió que se reconocieran los derechos de esa minoría y así desactivar un conflicto que podría haber sido grave al implicar a la Federación Rusa.

¿Qué perdería la UE si la ampliación no se produjera en el plazo previsto y fuera retrasada de forma indefinida? Probablemente perdería mercados y oportunidades de inversión, pero este no es un argumento de importancia a favor de la ampliación, dado el escaso peso actual de la economía de los candidatos, incluso tomada en conjunto. Mucho más importante es el argumento de la seguridad: sin esa expectativa de entrada en la UE, la vida política de la región, libre de la presión democratizadora y pacificadora de la UE, discurriría muy probablemente por derroteros más autoritarios y los conflictos de minorías encontrarían un ambiente político mucho menos proclive a la resolución pacífica, con el riesgo consiguiente de conflictos armados, oleadas de refugiados y exportación de la criminalidad que esos conflictos generan. La actitud de la Comisión de ofrecer una puerta abierta a una futura integración de los Estados exyugoslavos, muy lejanos en la actualidad –excepto Eslovenia, obviamente- de cumplir con los criterios de Copenhague, tiene que entenderse en este marco de construcción de una Europa más segura, del que la ampliación forma parte.

Carmen González Enríquez

Profesora Titular de Ciencia Política. UNED

[1] .- Joan Lofgren, "A different kind of Union", *Transitions*, 4:6, 1997, 46-52

[2] .-J. Chinn y R. Kaiser, *Russians as the new minority*, Westview Press, Colorado, 1996. P. Kolstoe, *Russians in the Former Soviet Republics*, Hurst and Co., Londres, 1995.

[3] .-Gerard F. Brillantes, "Uncertainty around the Baltic Sea", *Transitions*, 4:6, 1997, 53-57

[4] .- Josef C. Brada "The European Community and Czechoslovakia, Hungary and Poland", *Report on Eastern Europe*, 2:49, 1991, 27-32

[5] .- Francia vetó en 1991 un acuerdo comunitario para aumentar las cuotas de productos cárnicos de Polonia, Hungría y Checoslovaquia

[6] .- El País, 23 noviembre 1991

[7] .- Alexis Galinos, "Central Europe and the EU: Prospects for Closer Integration", *RFE/RL Research Report*, 3:29, 1994, 19-25

[8] .- Patrice Dabrowski, "East European Trade. Getting the West Involved". *Report on Eastern Europe*, 2:42, 1991, 30-37

[9] .-<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare>

[10].- Reglamentos CE 1267/99 (ISPA) y 1268/99 (SAPARD), ambos del 21 de junio de 1999

[11] .- *Uniting Europe*, nº 200, 16 de septiembre de 2002

[12] .- *Uniting Europe*, nº 206, 30 de octubre de 2002

[13] .- Eurostat. News Release, nº 31, marzo 2001. [http:// europa.eu.int/comm/eurostat](http://europa.eu.int/comm/eurostat)

[14] .- "The impact of Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States". European Integration Consortium. Estudio encargado por la Comisión Europea. 2001

[15] .- Eurobarometer. Public Opinion in the Candidate Countries. 2001. Comisión Europea. Una encuesta de mayo del 2000 del Central European Opinion Research Group mostraba también una modesta inclinación a emigrar entre checos y húngaros, más alta entre los polacos y los no invitados a la primera ronda, Rumanía y Bulgaria. *RFE/RL Newslines*, 3 de julio de 2001.

[16] .- La medición de la corrupción de Transparency International (TI) se elabora a partir de entrevistas a empresarios que invierten en el país en cuestión. Es, por tanto, una medición sobre la "corrupción percibida" por los empresarios y no sobre la real, lo que exigiría estudios mucho más costosos y complejos. En cualquier caso el índice de TI tiene un gran valor como instrumento de medición comparativa entre los países incluidos. Véase www.transparency.org

[17] .- Los datos de TI se inician en 1995 pero el grueso de los candidatos se han incorporado a la medición recientemente.

- [18] .- Estos datos se refieren sólo a los países candidatos, es decir, no incluyen a la importante minoría gitana de Serbia y Montenegro (unas 500.000 personas) ni a la de Macedonia (180.000) o a las menores de cualquiera de las otras repúblicas exyugoslavas, excepto Eslovenia. Jeremy Druker "Present but unaccounted for", *Transitions*, 4:3, 1997, 22-23
- [19] .- Véase referencia de la nota anterior
- [20] .- RFE/RL Newslines, 10 de agosto del 2000
- [21] .- Eurobarometer. Public Opinion in the European Union, nº 56, otoño 2001. Comisión Europea
- [22] .- Andrés Ortega, "Pequeña gran Europa", *El País*, 14 de octubre de 2002
- [23] .- Eurobarometer. Public Opinion in the Candidate Countries. Otoño 2001. Comisión Europea
- [24] .- No se habla aquí de los reinos medievales que, en propiedad, no pueden considerarse Estados.
- [25] .- Rudolf Hermann, "Ready for the Chop", *Central Europe Review*, agosto 1999, www.ce-review.org.
- [26] .- Las cifras son estimativas y están sujetas a discusión. Por otra parte, estas minorías son las primeras en intentar la emigración hacia el Estado-madre (Polonia o Hungría) por lo que su número está decreciendo.
- [27] .- Tim Snyder, "Look East, Face West", *Transitions*, 5:9, 1998, 54-57
- [28] .- Carmen González Enríquez "La protección de las minorías nacionales transfronterizas", en la sección de Análisis de esta misma web
- [29] .- Eurobarometer, Public Opinion in the Candidate Countries. Otoño 2001. Comisión Europea. La pregunta sobre los temores asociados con la UE es cerrada, es decir, al entrevistado se le ofrece una lista de respuestas que, excepto en una sobre el coste de la ampliación para su país, coinciden en el cuestionario utilizado para los países candidatos y el de los países miembros. Este carácter cerrado de la pregunta nos impide conocer cuáles son los temores que los entrevistados habrían expresado espontáneamente en caso de presentárseles una pregunta abierta.
- [30] .- Eurobarometer Public Opinion in the Candidate Countries. Otoño 2001. Comisión Europea.
- [31] .- Sobre los efectos de la transición económica en la estructura social véase Carmen González Enríquez, "Cambio social en Hungría desde 1989". Revista electrónica *Papeles del Este*, nº1, www.ucm.es/bucm/cee/papeles Enero 2001
- [32] .- La pregunta de 1991 era: "Si su país se integrase en el futuro en la Comunidad Europea, ¿usted estaría muy a favor de ello, algo a favor, algo en contra o muy en contra?" (se recogen en el cuadro las dos respuestas favorables). La pregunta del 2001 es: "Si mañana hubiera un referéndum sobre la entrada de su país en la UE, ¿votaría usted a favor o en contra?" (se señala en el cuadro el porcentaje de los que votarían a favor).
- [33] .- Comisión Europea: "Hacia una mayor integración económica. Ayuda financiera, política, comercial e inversión de la Unión Europea con respecto a Europa Central y Oriental". Bruselas, 1997
- [34] .- Web de CEFTA, www.cefta.org
- [35] .- Jeremy Druker, "Vestiges of Visegrad", *Transitions*, 5:9, 1998, 46-53
- [36] .- Hugh Miall, *Shaping the new Europe*, Pinter Publishers, Londres, 1993
- [37] .- Jan B. de Weydenthal "EC keeps Central Europe at arm's length", *RFE/RL Research Report*, 2:5, 1993, 29-31
- [38] .- Jiri Pehe, "Czechs fall from their ivory tower", *Transitions*, 4:3, 1997, 22-27
- [39] .- *Uniting Europe*, nº 200, 16 septiembre 2002
- [40] .- Irena M. Kroumova-Tzenkova, "Europa Central y Oriental entre el regionalismo y la integración europea. Las nuevas formas de cooperación intrarregional". Mimeo, Escuela Diplomática, 1996
- [41] .- Otro foro báltico de menor peso es el que reúne a Estonia, Letonia y Lituania en el Baltic Council of Ministers, creado en 1994.
- [42] .- Carmela Martín, "Las principales repercusiones económicas de la ampliación de la UE desde la óptica de España". *Papeles de Economía*, nº 91, 2002, 202-216
- [43] .- Datos proporcionados por las Embajadas de Hungría y la República Checa en España
- [44] .- La República Checa se encuentra además enfrentada a Alemania por la reivindicación de los alemanes que fueron expulsados de los Sudetes tras la SGM de que se anulen los decretos que ordenaron esa expulsión.
- [45] .- Carmen González Enríquez, "Minorías nacionales, el papel pacificador de la UE". *Política Exterior*, nº 78,

diciembre del 2000, 43-52. Sobre este tema va a publicarse próximamente el libro "Conflictos étnicos en Europa del Este. Origen, prevención y resolución" (Carmen González Enríquez, compiladora), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es una fundación privada e independiente cuya tarea es servir de foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de España. El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus analistas o colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación.

© *Fundación Real Instituto Elcano* 2011

[Subir ▲](#)